



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 366 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 26 OCT 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 1026-2016-GRJ/ORAJ de fecha 21 de octubre del 2016; el Reporte N° 195-2016-GRJ/ORAF de fecha 10 de octubre del 2016; la solicitud con fecha de recepción 04 de octubre del 2016, sobre Recurso de Apelación contra Resolución Directoral Administrativa N° 615-2016-GRJ/ORAF de fecha 26 de septiembre del 2016, interpuesto por el administrado **RICHARD SANDRO CARDENAS QUISPE**; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme fluye de los actuados, Mediante Resolución Directoral Administrativa N° 615-2016-GRJ/ORAF, de fecha 26 de septiembre del 2016, la Dirección Regional de Administración y Finanzas resuelve declarando improcedente la petición de **Richard Sandro Cardenas Quispe**, sobre pago de indemnización por daños y perjuicios causados por lucro cesante y daño moral, por carecer de sustento técnico y legal; y, El día 04 de octubre del 2016, el señor Richard Sandro Cárdenas Quispe interpone recurso de apelación contra la resolución aludida precedentemente;

Que, el inciso 109.1 del artículo 109 de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General determina: "Frente a un acto que supone viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa en la forma prevista en esta Ley...". Para el caso materia de análisis se ha interpuesto el recurso impugnatorio de apelación; por lo que, corresponde evaluar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia;

Que, el impugnante es su escrito de apelación señala como pretensión impugnatoria lo siguiente: "... interpongo RECURSO IMPUGNATORIO DE APELACIÓN CONTRA LA Resolución Directoral Administrativa N° 0615-2016-

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1743735
EXP. N°	1173701



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

GRJ/ORAF que declara improcedente solicitud de indemnización de daños y perjuicios, a fin de que el Órgano Administrativo Superior se sirva REVOCAR la resolución impugnada y REFORMANDOLA declaren fundada mi solicitud, de acuerdo a los siguientes fundamentos:" (Sic)



Asimismo, establece como fundamento el órgano administrativo de primer grado ha cometido error in procedendo; empero, en los considerandos primero y segundo no expresa cual es la infracción normativa que cometieron en su perjuicio. No obstante, en aplicación del principio de informalismo, el recurso de apelación será entendido como la impugnación sustentada en diferente interpretación de las pruebas producidas.



Que, De la revisión del recurso impugnatorio, en especial del considerando primero y segundo, se observa como argumento del impugnante, que la instancia de primer grado no evaluó:

a) Que ha padecido un despido arbitrario declarado en el Expediente judicial N° 1870-2012-0-1501-JRLA-01.

b) Que ha sido repuesto a partir del 06 de septiembre del 2016 conforme al acta de reposición.

En consecuencia, señala en su tercer considerando del escrito impugnatorio que se ha vulnerado sus derechos constitucionales al debido procedimiento administrativo, defensa y motivación de resoluciones administrativas, todas ellas previstas en el artículo 139 de la Constitución política del Estado.

Que, por su parte, la resolución impugnada en su considerando tercero señala que el pago de remuneraciones es una contraprestación por el trabajo efectivamente realizada de conformidad al literal d) de la tercera Disposición Complementaria de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de presupuesto. Agrega en sus considerandos que la solicitud del recurrente carece de sustento técnico y legal, teniendo en cuenta que durante los periodos efectivamente laborados se le pago sus remuneraciones.



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"



Es pertinente señalar, que el Tribunal Constitucional respecto al derecho fundamental de la debida motivación ha señalado en la sentencia recaída en el Exp. 03864-2014-PA/TC, en el fundamento 25 expresamente:

"En tal sentido, "(...) el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al Juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos" (STC 1480- 2006-AA/TC, Fundamento 2)."

Fundamento del Tribunal Constitucional que es de aplicación a los procedimientos administrativos mediante doctrina jurisprudencial, máxime si el impugnante en el considerando tercero de su recurso indica que la resolución recurrida vulnera su derecho a la debida motivación;

En ese sentido, analizada la resolución recurrida se advierte que ha declarado improcedente la solicitud de la recurrente en aplicación del literal d) de la Tercera Disposición Complementaria, de la Ley N° 28411, pues, al impugnante hasta el momento de su separación y luego de su reposición se le ha cumplido el pago de sus remuneraciones como prestación por su labor efectivamente desempeñada. Más aún, si en la solicitud y recurso de apelación, el impugnante omite proceder diligentemente desarrollando los elementos de la responsabilidad civil (Conducta antijurídica, nexo causal, daño y factor de atribución), para que a partir de ello se pueda resolver su solicitud en aplicación supletoria del artículo 1321 y 1322 del Código Civil;

Adicionalmente, resulta insoslayable la aplicación del artículo 6 de la Ley N° 30372, en donde se establece:

"Ingresos del personal Prohibese en las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, el reajuste o incremento de remuneraciones, bonificaciones, dietas, asignaciones, retribuciones, estímulos, incentivos, compensaciones económicas y beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo y fuente de



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

financiamiento. Asimismo, queda prohibida la aprobación de nuevas bonificaciones, asignaciones, incentivos, estímulos, retribuciones, dietas, compensaciones económicas y beneficios de toda índole con las mismas características señaladas anteriormente. Los arbitrajes en materia laboral se sujetan a las limitaciones legales establecidas por la presente norma y disposiciones legales vigentes. La prohibición incluye el incremento de remuneraciones que pudiera efectuarse dentro del rango o tope fijado para cada cargo en las escalas remunerativas respectivas." (El énfasis es nuestro).

La norma precitada, prohíbe el incremento de la remuneración del personal del sector público en sus diversas modalidades. En ese sentido no pueden ampararse los argumentos del impugnante plasmados en su recurso de apelación de fecha 04 de octubre del 2016.

En consecuencia, visto el recurso de apelación interpuesto por el impugnante se aprecia que no existe sustento en ninguno de sus extremos que logre desvirtuar en relación a una interpretación diferente de puro derecho. En ese sentido, habiéndose establecido en nuestro ordenamiento que todo acto administrativo es presuntamente válido, en tanto no sea declarada su nulidad por autoridad administrativa competente, conforme se encuentra establecido en el artículo 9° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, el acto recurrido, es un acto administrativo válido por haber sido emitido por autoridad competente, se encuentra debidamente motivada y dentro del marco del Principio de Legalidad y Debido Procedimiento, en ese entender al encontrarse, la N° Resolución Directoral Administrativa N° 0615-2016-GRJ/ORAF, debidamente motivada en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, conforme lo dispone el numeral 4) del artículo 3° de la Ley 27444; y ésta instancia, al no encontrar merito suficiente para cambiar el criterio de la ya adoptada por el Director Regional de Transportes y Comunicaciones, corresponde declarar infundado el recurso de apelación planteado por el impugnante, por lo tanto fin del procedimiento y por agotada la vía administrativa de acuerdo al artículo 218° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, "Los actos administrativos que agotan la vía administrativa podrán ser impugnados ante el poder Judicial mediante el proceso contencioso administrativo a que se refiere el artículo 148° de la Constitución Política del Estado".

Que, en atención a las consideraciones expuestas anteriormente y contando con el Informe Legal N° 1026-2016-GRJ/GRDS de fecha 21 de octubre del 2016, se debe declarar infundada la solicitud de apelación contra Resolución Directoral



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

Administrativa N° 0615-2016-GRJ/ORAF de fecha 26 de Septiembre del 2016; del administrado **RICHARD SANDRO CARDENAS QUISPE**;

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso "d" de la Ley 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Junín, aprobado por Ordenanza Regional N° 103-2011-GRJ/CR, las facultades delegadas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0114-2016-GR-JUNIN/GR, de fecha 10 de Febrero de 2016 y con la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Junín;



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- INFUNDADA la solicitud de apelación contra Resolución Directoral Administrativa N° 0615-2016-GRJ/ORAF de fecha 26 de Septiembre del 2016; del administrado **RICHARD SANDRO CARDENAS QUISPE**, conforme a los fundamentos expuestos en la presente;

ARTÍCULO SEGUNDO.- DAR por agotada la vía administrativa, conforme lo dispuesto por el artículo 218° de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución, al impugnante, a la Dirección Regional de Administración y Finanzas, y a los demás órganos competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes.

HYQ. 7 26 OCT 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL